



NUE 119-A-2019 (AG)

Romero López contra Policía Nacional Civil (PNC)

Resolución definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas con veintinueve minutos del dieciséis de junio de dos mil veinte.

Descripción del caso:

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por **Carlos Mauricio Romero López**, en contra de la resolución emitida por el oficial de información de la **Policía Nacional Civil (PNC)**, a su solicitud de información consistente en: "nombre de cada uno de los jefes de Secciones Territoriales de Investigación Disciplinaria, Departamento de Supervisión, Departamento Operativo de Investigaciones, Sección Investigación Disciplinaria, Apoyo Técnico Administrativo y Unidad de Investigación Disciplinaria".

Por su parte el oficial de información de la **PNC**, resolvió lo siguiente: "denegar el acceso a la información solicitada, por estar clasificada previamente por el titular de la institución como información reservada".

Al respecto, el apelante manifestó su inconformidad, debido a que dicha resolución le causa perjuicio en razón que la información solicitada es indispensable para probar que la persona que resolvió la recusación presentada, en proceso disciplinario, no es el jefe de la sección o departamento respectivo. Que, para efecto de lo anterior necesita únicamente el nombre de los/as jefes y que no está solicitando ningún dato personal.

Este Instituto admitió la apelación y designó al Comisionado Andrés Grégori Rodríguez para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución. En plena observancia y respeto del derecho de defensa y audiencia que debe imperar en todo procedimiento administrativo, de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), se requirió a la **PNC** que rindiera el informe de ley; sin embargo, dicho informe de ley no fue rendido por el ente obligado.



La realización de la audiencia oral fue llevada a cabo con la comparecencia de la representación del ente obligado; dado que el apelante pese a haber sido legalmente notificado no se hizo presente a dicha fase procedimental.

Durante la etapa de ofrecimiento probatorio, el ente obligado ofreció como prueba el documento consistente en copia certificada del acuerdo PNC/DG/N° A-0175-02-2019; por lo que, posterior al análisis por parte de los Comisionados y Comisionadas de este Instituto se procedió a admitir la prueba ofrecida por tener dicha documentación relación con el objeto de controversia.

Análisis del caso:

Para resolver la presente controversia se analizará el caso de la manera siguiente: I- breves acotaciones del Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP); II- examen sobre los requisitos de la información reservada; III- aplicación al caso concreto.

I- Este Instituto ha pronunciado en reiteradas ocasiones que el **Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP)** tiene una condición de derecho fundamental, anclado en el reconocimiento constitucional del derecho a la libertad de expresión (artículo 6 de la Constitución), el cual tiene como presupuesto el derecho a investigar o buscar y recibir información de toda índole, pública o privada, que tengan interés público; y, en el principio democrático del Estado de Derecho – de la República como forma de Estado-, (artículo 85 de la Constitución) imponiendo a los poderes públicos el deber de garantizar la transparencia y la publicidad en la Administración, así como la rendición de cuentas sobre el destino de los recursos y fondos públicos.

Ahora bien, es necesario tomar en cuenta que el DAIP no es absoluto y es susceptible de restricciones condicionantes en su pleno ejercicio. No obstante, los límites de este derecho no pueden ser arbitrarios, sino plenamente establecidos por el/a legislador/a, a efecto de prevenir que la administración pública utilice discrecionalmente argumentos encaminados a negar la información solicitada por cualquier persona.

II- Uno de los límites al DAIP es la **información reservada**, la cual se define como aquella información pública cuyo acceso se restringe de manera expresa de conformidad con la LAIP – específicamente en el artículo 19 de dicho cuerpo normativo- en

razón de un interés general durante un periodo determinado y por causas justificadas – artículo 6 letra “e” de la LAIP.

El titular del ente obligado es el encargado de clasificar la información, tomando en cuenta la legalidad, temporalidad y razonabilidad del porqué se decide excluir temporalmente la información; una vez ha concluido el plazo de reserva, la información vuelve a ser pública y por lo tanto puede ser solicitada por cualquier persona en virtud del DAIP. Es importante señalar que las causales establecidas en el artículo 19 de la LAIP son taxativas y no pueden invocarse otras que no estén señaladas en la ley.

Ahora bien, este Instituto ha sostenido que para la validez de una declaración de reserva se necesita la concurrencia de tres caracteres o requisitos: *a) legalidad, b) razonabilidad y c) temporalidad*, y que ante la ausencia de uno de ellos debe desclasificarse la información.

a) Legalidad: la facultad que tienen las autoridades para reservar cierta información debe enmarcarse en el ordenamiento legal vigente, a fin de garantizar que los límites al ejercicio del DAIP estén dirigidos a la protección de otros derechos de idéntica o superior importancia.

b) Razonabilidad: Es necesario que se razone y fundamente la adopción de esta limitación, pues con ello se busca reducir la arbitrariedad en las actuaciones de los funcionarios con potestad para declarar la clasificación de la información pública en reservada. En esencia no basta con enunciar los motivos que conllevan al ente obligado a declarar la reserva, sino que tales argumentos deben ser jurídicamente válidos, en la medida que no se establezca un límite arbitrario al DAIP.

c) Temporalidad: Se refiere a que la restricción del acceso a la información debe estar sujeta a un plazo definido, establecido en el artículo 20 de la LAIP y 31 letra “f” del RELAIP; y es que, si no se establece el plazo de reserva podría vulnerarse el DAIP de las personas al generar incertidumbre sobre el momento en que la información estará a su disposición.

III- Para el caso en comento, el ente obligado denegó la información alegando que “denegar el acceso a la información solicitada, por estar clasificada previamente por el titular de la institución como información reservada (acuerdo PNC/DG/No. A-0175-02-2019)



firmado por el Comisionado Howard Augusto Cotto Castaneda, Director General de la Policía Nacional Civil en el cual establece clasificar como información reservada, lo referente a nombre, apellido, hoja de vida, así como datos del personal que labora en la Policía Nacional Civil, contenida en los documentos de plantilla policial, Documento Único de Identidad, planillas de pago mensuales físicas o digitales, así como en expedientes laborales y de historial policial.

En relación a dicho documento es pertinente analizar el cumplimiento o no de cada uno de los requisitos para la validez de la declaratoria de reserva:

Legalidad: La facultad que tienen las autoridades para reservar cierta información debe enmarcarse en el ordenamiento legal vigente, a fin de garantizar que los límites al ejercicio del DAIP estén dirigidos a la protección de otros derechos de idéntica o superior importancia.

En el caso bajo análisis la declaratoria de reserva emitida por la PNC se realizó de conformidad a lo establecido en los artículos 19 literales b), d), f) g) y h), 20 y 21 de la LAIP; es decir causales que hacen referencia a poner en riesgo la defensa nacional y seguridad pública; la vida, seguridad o salud de cualquier persona; la que cause perjuicio en la prevención investigación o persecución de actos ilícitos; estrategias y funciones estatales; y, las que puedan generar una ventaja indebida.

En relación al acuerdo PNC/DG/No. A-0175-02-2019, presentado como prueba en la audiencia oral, este Instituto advierte que de las cinco causales establecidas para fundamentar la reserva de la información requerida, en el documento antes mencionado así como en la realización de la audiencia oral correspondiente al presente caso, se hizo alusión a la causal relacionada: “la que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”; argumentando que en relación a la coyuntura que se vive, dicha reserva se hizo con la finalidad de proteger la identidad del personal de la PNC. Por lo tanto, el requisito de la legalidad -antes apuntado-, no se tiene debidamente acreditado puesto que de las causales restantes no se concretiza el daño que se ocasionarían si se brinda el acceso a la información solicitada.

Por lo tanto, para que se cumpla con este requisito no basta con la mera invocación de la causal en que se fundamenta la declaratoria de reserva sino que, es también indispensable acreditar que se cumplen con las condiciones necesarias para su aplicación; es decir, que los hechos y circunstancias del caso se sujetan a lo previsto por la ley.

En razón de lo anterior, se advierte que si bien se han establecido la disposición normativa en la cual se basa la reserva; no se acreditó con argumentos reales y medios de prueba fehacientes que la liberación de la información amenace o perjudique la prevención investigación o persecución de actos ilícitos; estrategias y funciones estatales; y, las que puedan generar una ventaja indebida, pues brindar el nombre de estos servidores públicos a consideración de este Instituto, no se ponen en riesgo los bienes jurídicos que se pretenden proteger, a la vez que la ciudadanía tiene el derecho de conocer quienes se encuentran laborando en dichos cargos, como parte de su derecho a controlar las funciones y actividades de los entes obligados.

Asimismo, se advierte que el apelante está requiriendo información relacionada a unidades disciplinarias, lo cual pretende ser usado de manera interna.

En conclusión, en virtud que la PNC no logró acreditar la reserva de la información solicitada, al tener por no cumplido el requisito de legalidad de la reserva invocada, al no reunir los requisitos necesarios para su adopción justificando las causales establecidas para la reserva de dicha información; es procedente que este Instituto revoque la resolución impugnada y declare justificado el acceso a la información solicitada.

Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas y los artículos 2, 6, 85 y 86 de la Constitución de la República; 52 inciso 3°, 58 letra “d”, 90, 94, 96 letra “d” y 102 de la LAIP; 79 y 80 del RELAIP, a nombre de la República de El Salvador, este Instituto **resuelve**:

a) **Revocar** la resolución emitida por el oficial de información de la **Policía Nacional Civil (PNC)**, de fecha 03 de mayo de 2019, en cuanto deniega el acceso a la información relativa a “nombre de cada uno de los jefes de Secciones Territoriales de Investigación Disciplinaria, Departamento de Supervisión, Departamento Operativo de



Investigaciones, Sección Investigación disciplinaria, Apoyo Técnico Administrativo y Unidad de Investigación Disciplinaria”, por no haber acreditado que dicha información se encuentra reservada de conformidad con los requisitos legales establecidos, según lo expuesto en la presente resolución.

b) **Ordenar a la PNC** que a través de su oficial de información, dentro del plazo de **tres días hábiles**, contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, proporcione a **Carlos Mauricio Romero López** la información descrita en el literal anterior.

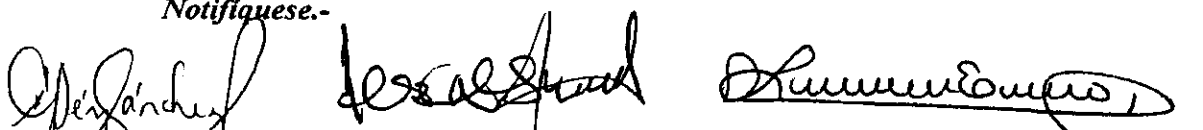
c) **Ordenar a la PNC** que dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de la obligación contenida en la letra b) de esta parte resolutive, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**

d) **Hacer saber** a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

e) **Remitir** el presente expediente a la **Unidad de Cumplimiento** de este Instituto para verificar la eficacia de esta resolución.

f) **Publíquese** esta resolución oportunamente.

Notifíquese.-


PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN:
XT/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los diecinueve días del mes de junio de dos mil veinte.


José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP



